

ESTADO LA
PETICION

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
DE BILBAO

SSR 839/08

SENTENCIA n° 1/09

En Bilbao a trece de febrero de dos mil nueve.

Mónica González Fernández, magistrada del Juzgado de lo Social número dos de Bilbao, ha examinado las presentes actuaciones de SSR 839/08 en que ha sido demandante [redacted] y demandados INSS y TGSS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de la demanda presentada por [redacted] frente a INSS y TGSS en la que se suplica que con estimación de la misma se declare el derecho a la pensión de viudedad de la demandante.

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda se dio traslado de la misma a la demandada, señalando día y hora para la celebración del juicio que tuvo lugar el día 11 de febrero. En el acto del juicio la parte actora se ratificó en su escrito inicial; la demandada contestó en términos de oposición interesando la desestimación íntegra de la demanda. No habiendo conformidad sobre los hechos se recibió el pleito a prueba, proponiéndose como medios de prueba documentales. Todas las pruebas fueron practicadas en el plenario tras lo cual se formularon conclusiones quedando el pleito visto para sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: La actora nacida al [redacted] de octubre de [redacted] figura afiliada al Régimen General de la Seguridad Social número [redacted].

SEGUNDO: Con fecha de 1 de enero de 1988 la demandante contrajo matrimonio canónico con [REDACTED]. De dicho matrimonio nacieron y viven dos hijos, [REDACTED] el 10 de noviembre de 1988 y [REDACTED] el 10 de marzo de 1989.

TERCERO: Con fecha de 1 de diciembre de 1988 por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Baracaldo se dictó sentencia declarando la separación legal del matrimonio, y aprobando el convenio regulador suscrito de fecha 14 de octubre de 1988.

En la cláusula quinta del convenio regulador se estipula: "Que en relación con su posición respectiva y teniendo en cuenta las circunstancias enumeradas en el Art. 97 del Código Civil, ambos cónyuges reconocen que su separación no implica en modo alguno un desequilibrio económico ni empeoramiento de su situación anterior en el matrimonio y, en su consecuencia ambos renuncian a toda pensión compensatoria".

En el mismo convenio se estableció a favor de los hijos menores del matrimonio una pensión alimenticia por importe de 50.000 pesetas.

CUARTO: Con fecha de 16 de enero de dos mil 1988 por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Baracaldo se dictó sentencia decretando el divorcio del matrimonio y aprobando el convenio regulador propuesto y suscrito por ambos de fecha 22 de septiembre de dos mil 1988. En dicho convenio se establece una pensión alimenticia a favor del hijo menor de edad [REDACTED] por importe de 205 euros mensuales; y con relación a la pensión compensatoria se estipula que "Ambos cónyuges admiten que en la actualidad no se dan los supuestos que permitirían fijar pensión por desequilibrio a favor de alguno de los cónyuges".

QUINTO: [REDACTED] falleció el 20 de junio de dos mil ocho.

SEXTO: Con fecha de 1 de agosto de dos mil ocho por el INSS se dictó resolución negando a la actora el derecho a la pensión de viudedad de acuerdo con el artículo 174.2 LGSS. Frente a tal resolución se interpuso reclamación previa que fue desestimada. Se da por reproducido el expediente administrativo.

SÉPTIMO: La base reguladora de la prestación postulada es de 736,76 euros.

El porcentaje de pensión que corresponde a la actora es del 52 por ciento.

La fecha de efectos económicos es de 1 de julio de dos mil ocho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Los hechos declarados probados además de resultar de la prueba documental aportada por las partes, resultan conformes no habiéndose suscitado controversia alguna respecto de los mismos.

La cuestión debatida es estrictamente jurídica, de interpretación del artículo 174.2 LGSS tras la reforma operada por la Ley 40/2007, que entró en vigor el día 1 de enero de dos mil ocho, con anterioridad al hecho causante de la prestación pretendida, el fallecimiento del ex cónyuge [REDACTED], acontecido el 20 de junio de dos mil [REDACTED].

SEGUNDO.- Para la interpretación de las normas jurídicas, el art. 3.1 del CC ordena atender al sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

Por su parte, el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ordena interpretar las normas con arreglo a los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos; permitiendo el apartado 3º plantear la cuestión inconstitucional únicamente cuando por la vía de la interpretación no sea posible acomodar la norma al ordenamiento constitucional.

Por tanto, para la interpretación del precepto tenemos a nuestra disposición los llamados métodos literal, sistemático, histórico y teleológico, debiendo llegar a un resultado que se adecue a los preceptos y principios constitucionales.

Con arreglo al método literal, atendiendo exclusivamente a la redacción literal del precepto, no puede compartirse el argumento del INSS, pues utilizando la forma verbal de gerundio "siendo acreedoras", en lugar del presente de subjuntivo "sean acreedoras", debe entenderse que la condición para acceder a la prestación no está referida a la percepción de la pensión compensatoria, sino a su extinción en tal caso. Es decir, lo que se exige es que si se está percibiendo la pensión compensatoria ésta quede extinguida al fallecimiento del causante. Téngase en cuenta que el art. 101 del CC contempla la posibilidad de que la pensión compensatoria subsista tras la muerte del deudor, pasando a gravar a sus herederos (como se comprenderá, tal y como más adelante se apuntará, esta circunstancia únicamente se dará en el caso de grandes patrimonios con muy elevado nivel de vida). Si se hubiera pretendido condicionar el acceso de la prestación a la existencia de una pensión compensatoria la

redacción hubiera sido muy distinta (por ejemplo, "el derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente quedará condicionado, en todo caso, a que, sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el art. 97 del Código Civil, quedando ésta extinguida por el fallecimiento del causante", habiéndose subrayado las diferencias con el texto vigente).

No podemos presumir en el Legislador una utilización equivocada de los tiempos verbales, especialmente si reparamos en que para el caso de la nulidad matrimonial, el redactado es mucho mas claro, disponiendo el tercer párrafo el art. 174.2 de la LGSS: "En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el art. 98 del código Civil". En el caso de la nulidad matrimonial si parece establecerse como requisito para acceder la pensión de viudedad que el beneficiario haya sido acreedor de la indemnización prevista en el art. 98 del CC, utilizando el Legislador un redctado claro que perfectamente podría haber empleado, siguiendo una misma técnica narrativa, para regular los casos de separación y divorcio.

Atendiendo a un criterio sistemático podría defenderse que el fundamento en el caso de la separación o divorcio es el mismo que el de la nulidad, por lo que si para ésta se exige que el eventual beneficiario haya percibido la indemnización prevista en el art. 98 del CC resulta coherente que para los casos de separación o divorcio se exija ser acreedor de la pensión compensatoria el art. 98 del CC. Sin embargo, debe repararse en que la regulación de la nulidad difiere en gran medida de la de la separación y el divorcio. En cuanto a estas últimas situaciones de crisis matrimonial, se tiende a hacer abstracción de las causas de las mismas, especialmente tras la última reforma del CC operada por la Ley 15/2005, habiendo pasado de un sistema causal a un sistema abstracto, en el que se pone el acento en la situación de crisis, y no en sus causas. No puede afirmarse lo mismo respecto a la nulidad, en la que sigue existiendo un régimen jurídico diferente para el contrayente de buena fe y para el de mala fe, que haya obrado de buena fe, único posible acreedor de la indemnización del art. 98 del CC.

Si atendemos a un criterio histórico en primer lugar hemos de examinar el texto del proyecto de ley que fue presentado por el Gobierno, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, VIII Legislatura, de 23 de Febrero de 2.007. Respecto a la materia que nos ocupa, tanto la exposición de motivos que más adelante se analizará, como el articulado, son idénticos al texto finalmente aprobados, no sufriendo alteración alguna durante su tramitación parlamentaria, no constándole a este Juzgador que se presentarán enmiendas al concreto redactado, ni que el mismo fuera objeto de especial debate parlamentario.

Conviene, por tanto, remontarse al Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social, suscrito por el

Gobierno, los sindicatos UGT y CC.OO. y las asociaciones patronales CEOE y CEPYME en fecha 13 de julio de 2.006, y cuya firma dio lugar a la confección del proyecto de la ley presentado por el gobierno recogiendo las modificaciones en materia de Seguridad Social pactadas por los interlocutores sociales. En el concreto aspecto de la pensión de viudedad, en el punto III.3.a se acordó: "La pensión de viudedad debe recuperar su carácter de renta de sustitución y reservarse para aquellas situaciones en las que el causahabiente contribuía efectivamente al sostenimiento de los familiares supervivientes: parejas de hecho, siempre que tuviesen hijos en común con derecho a pensión de orfandad y/o existiese dependencia económica del sobreviviente respecto del causante de la pensión o personas divorciadas perceptoras de las pensiones previstas en el Código Civil". Redacción que reforzaría los postulados del INSS, pues confirma que en la raíz de la reforma subyace la intención de devolver a la pensión de viudedad el carácter de renta de sustitución, viniendo a compensar la merma de recursos, que no se produciría en el caso de personas separadas o divorciadas que no percibieran la pensión compensatoria del art. 97 del CC.

No obstante, lo anterior no debe conducir a la confirmación de la postura del INSS, pues se trata de un acuerdo de bases mínimas, que debían desarrollarse legislativamente, no recogiendo una previsión concreta al respecto, sino una línea de trabajo. Mucho más concreto es el acuerdo, por ejemplo, a la hora de establecer la posibilidad de acceder a la prestación de muerte y supervivencia en el caso de parejas de hecho.

Además, si atendemos a los antecedentes históricos más cercanos; es decir, a la anterior redacción del precepto, advertimos que ninguna referencia se hacía a la pensión compensatoria. Por tanto, para que ahora su percepción pueda considerarse como un requisito para el acceso a la prestación de Seguridad Social, modificación especialmente relevante, hemos de asumir que ésta era la finalidad de la norma, a pesar de que la redacción literal del precepto, como ya se ha visto, nos lleva a un resultado contrario; y, además, que esa finalidad se adecua a los principios constitucionales.

Pasando ya, por tanto, al método teleológico de interpretación, al objeto de atender a cuál pudo ser la voluntad del Legislador la primera fuente de conocimiento la encontramos en el propio preámbulo de la Ley 40/2007, cuyo redactado coincide con el de la exposición de motivos del proyecto de ley. Se apunta lo siguiente: "El acceso a la pensión de viudedad de las personas separadas judicialmente o divorciadas queda condicionado a la extinción por el fallecimiento del causante de la pensión compensatoria a que se refiere el art. 97 del Código Civil". La mención es muy escueta, pero suficientemente ilustrativa de la voluntad del Legislador, lo que se pretende fijar como condición es que se extinga la pensión compensatoria por el fallecimiento del causante, y no que con anterioridad la misma estuviera fijada. Es decir, tal y como apunta la parte actora, se

introduce una incompatibilidad entre la pensión pública de viudedad y la pensión compensatoria. Si otra hubiera sido la intención del Legislador bien pudiera haberla apuntado, especialmente si era tan relevante como pretende el INSS, pues supondría privar de la posibilidad de acceder a la pensión pública de viudedad a un colectivo muy numeroso; cada vez más, pues en nuestra sociedad actual hecho notorio es que cada vez proliferan más las separaciones y divorcios, y que, afortunadamente, cada vez existe menos desequilibrio entre cónyuges, principal fundamento de la pensión compensatoria.

Además, la reforma tiene su lógica, pues como antes ya se ha apuntado, la regla general es que la pensión compensatoria pueda extinguirse al fallecimiento de su deudor a petición de sus herederos. Únicamente subsistirá la obligación de seguir abonándola a cargo de la herencia del deudor en el caso de grandes patrimonios, en los que se trata de garantizar a ambos cónyuges de por vida el elevado nivel de renta del que disfrutaban constante matrimonio. Y lógico es también que en estos casos, al no existir situación de necesidad, no se permita el acceso a la prestación pública de viudedad.

Sorprendería otra interpretación cuando precisamente la última reforma del art. 97 del CC, llevada a cabo por la Ley 15/2005, ha introducido la posibilidad de fijar la compensación no sólo mediante una pensión vitalicia, sino también mediante una pensión temporal o una prestación única.

En definitiva, atendiendo tanto a una interpretación literal, como sistemática del precepto, así como a sus antecedentes y a la finalidad de la reforma, debe rechazarse la postura del INSS y acogerse la de la parte actora.

A mayor abundamiento, debe destacarse que la posición del INSS podría dar lugar a un resultado contrario al art. 9 de la Constitución, no por un supuesto carácter retroactivo de la norma, que no lo tiene, sino por poder afectar a un esencial principio de seguridad jurídica, pues un colectivo de miles de eventuales beneficiarios pudieran verse privados del acceso a una prestación pública de la relevancia social de la de viudedad en atención a actos jurídicos en ocasiones muy remotos en el tiempo (las pretensiones ejercitadas en los procesos matrimoniales y los convenios celebrados en su seno) y en los que ni siquiera era dable imaginar que quizás en el futuro su postura podría determinar el acceso a la pensión de viudedad. Asimismo, el criterio del INSS de confirmarse, provocaría un aumento de la litigiosidad en los procesos matrimoniales, e incluso podría dar lugar a acuerdos fraudulentos (por ejemplo pactando una exigua pensión compensatoria de un euro al mes) para eludir la eventual condición de acceso a la prestación.

Por último, no debe tampoco perderse de vista que la postura del INSS podría ser contraria al principio constitucional de igualdad; especialmente teniendo en cuenta los diversos ordenamientos jurídicos privados vigentes en nuestro Estado. Varias Comunidades Autónomas han legislado, y

de forma diversa, sobre los efectos personales y patrimoniales derivados de las crisis matrimoniales, especialmente teniendo en cuenta la propia regulación tradicional del régimen económico matrimonial.

Carecería de toda lógica condicional una prestación pública de ámbito estatal a concretas circunstancias jurídicas derivadas de la regulación del Derecho Civil Común, que no es aplicable en todo el territorio, sin considerar las peculiaridades de los distintos ordenamientos jurídicos privados.

Por todo lo anterior, ha de estimarse la demanda y reconocer el derecho de la demandante a la prestación con arreglo a los parámetros no controvertidos recogidos en la misma relación de hechos probados.

Vistos los preceptos legales y demás de general aplicación,

FALLO

ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por [REDACTED] frente a INSS y TGSS, declaro el derecho de la demandante a percibir una pensión de viudedad derivada del fallecimiento de [REDACTED], en un importe equivalente al 52 por ciento de una base reguladora mensual de 736,76 euros con fecha de efectos económicos al 1 de julio de dos mil ocho, condenando a las demandadas a estar y pasar por tal declaración.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.